



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 1 -

TOCA DE RECLAMACIÓN NÚMERO: REC-033/2020-P-3 (REASIGNADO AL TITULAR DE LA PRIMERA PONENCIA DE LA SALA SUPERIOR).

RECURRENTE: LICENCIADO ***,
APODERADO LEGAL DE LA C. ***, PARTE
ACTORA EN EL JUICIO DE ORIGEN.

MAGISTRADO PONENTE: DOCTOR JORGE
ABDO FRANCIS.

VILLAHERMOSA, TABASCO. ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

V I S T O S.- Para resolver los autos del toca relativo al Recurso de Reclamación número **REC-033/2020-P-3** (Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior), interpuesto por el licenciado ***, apoderado legal de la ciudadana ***, parte actora en el juicio de origen, en contra del auto de fecha **trece de noviembre de dos mil diecinueve**, en el que antes del cierre de instrucción se decretó el sobreseimiento del juicio, dictado por la **Tercera** Sala Unitaria de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dentro del expediente número 382/2016-S-3 y,

R E S U L T A N D O

1.- Por escrito presentado ante el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, el once de mayo de dos mil dieciséis, el licenciado ***, apoderado legal de la ciudadana ***, promovió juicio contencioso administrativo en contra del Receptor y Ejecutor de Rentas en el Municipio de Centro, Tabasco, señalando como actos impugnados los siguientes:

“La violación a los derechos de la audiencia, legalidad, seguridad jurídica, libre acceso a la Justicia(sic) imparcial pronta y expedita de mi mandante, derivados del acuerdo de MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN, DESIGNACIÓN DEL EJECUTOR E INSTRUCCIÓN AL MISMO de fecha dieciocho de abril de los corrientes, mismo que fue notificado en la misma fecha, emitido por el LIC.***, en su calidad de Receptor de Rentas de Centro Tabasco, en donde en forma

infundada e inmotivada se ordenan hacer efectivo(sic) dos requerimientos de pago de multa determinado(sic) por concepto de NO COMPARECIO(SIC) A LA DILIGENCIA DE CARÁCTER LABORAL a que se refiere la resolución de fecha 09 DE MAYO DE 2008 y de fecha 04 de abril de 2012, ambos emitidos por la DIRECCION(SIC) DEL TRABAJO Y PREVISION(SIC) SOCIAL en cantidad de: \$9,900.00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA(SIC) PESOS 00/100) cada uno, constitutivos de violaciones a los derechos humanos antes citados de mi mandante bajo el esquema de principio de certeza y seguridad jurídica.”

2.- Por acuerdo de fecha **quince de junio de dos mil dieciséis**, la Tercera Sala Unitaria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, a quien tocó conocer del asunto bajo el número de expediente **382/2016-S-3** admitió a trámite la demanda, ordenando emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación dentro del término de ley.

3.- Mediante acuerdo de fecha **seis de junio de dos mil diecisiete**, la Sala acordó de conformidad el oficio de contestación de demandada presentado por las autoridades, y en el mismo proveído, se ordenó correr traslado a la demandante con copia de la contestación que fue formulada y sus anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a sus derechos conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por perdido tal derecho y se acordaría lo conducente.

4.- Mediante proveído de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, la Sala dicto acuerdo de inactividad procesal en el juicio contencioso administrativo de origen, toda vez que ninguna de las partes había efectuado promoción alguna durante el término de ciento ochenta días naturales, y en consecuencia, el sobreseimiento.

5.- Inconforme con el acuerdo antes referido, mediante escrito presentado el **cuatro de diciembre de dos mil diecinueve**, la parte actora, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de reclamación.



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 3 -

6.- Mediante proveído de cinco de febrero de dos mil veinte, el Magistrado Presidente de este tribunal, admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, y ordenó correr traslado a la contraparte, a fin que dentro del plazo de cinco días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, asimismo designó a la Magistrada Titular de la Tercera Ponencia, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

7.- En proveído de cinco de marzo de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad demandada no desahogando la vista ordenada con relación al recurso de reclamación planteado por la parte actora, consecuentemente, al estar integradas las constancias del toca de reclamación que nos ocupa, se ordenó turnar el expediente a la Magistrada Titular de la Tercera Ponencia, para la elaboración del proyecto de sentencia; sin embargo, mediante diverso auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se reasignó el asunto al Magistrado Titular de la Primera Ponencia, Doctor Jorge Abdo Francis, a efectos de que formulara el proyecto de resolución respectivo, esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso c) del artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos Relativos a la Reapertura de las Actividades Jurisdiccionales, para la Ejecución del Programa de Reactivación Gradual y Ordenado de las Actividades Administrativas y Jurisdiccionales de este Órgano Constitucional Autónomo bajo el esquema de la nueva normalidad, así como el diverso Acuerdo General S-S/011/2020, y con el propósito de abatir las cargas de trabajo, por lo que, habiéndose elaborado el proyecto correspondiente, este Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, procede a dictar sentencia en los siguientes términos:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL.- Este órgano colegiado es competente para conocer y resolver el presente **RECURSO DE RECLAMACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171, fracción XXII, en relación con los diversos 108, 109 y 110, todos de la

Ley Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, publicada el quince de julio de dos mil diecisiete, en el Suplemento B al Periódico Oficial del Estado, número 7811 y que entró en vigor al día siguiente.

SEGUNDO.- PROCEDENCIA DEL RECURSO.- Es procedente el recurso de reclamación que se resuelve, al cumplir con los requisitos establecidos en la fracción VI y último párrafo del artículo 110¹ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en virtud que el recurrente se inconforma del auto de fecha **trece de noviembre de dos mil diecinueve**, a través del cual, antes del cierre de instrucción, se sobreseyó el juicio.

Así también se desprende de autos (foja 64 del duplicado del expediente principal), que el acuerdo recurrido le fue notificado al recurrente el **veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve**, por lo que el término de cinco días hábiles para la interposición del recurso que se resuelve, transcurrió del **veintiocho de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil diecinueve**², siendo que el medio de impugnación fue presentado el **cuatro de diciembre de dos mil diecinueve**, por lo cual el recurso se interpuso en tiempo.

TERCERO.- SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN.- En estricta observancia a los principios procesales de exhaustividad y congruencia que rigen las sentencias, conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente, se procede al estudio y resolución de los argumentos de reclamación del único agravio hecho valer por el recurrente, a través de los cuales medularmente sostiene lo siguiente:

¹ **Artículo 110.-** El recurso de reclamación procederá en contra de los acuerdos o resoluciones siguientes que:

VI. Antes del cierre de instrucción, declaren la improcedencia o el sobreseimiento del juicio;

(...)

La reclamación se interpondrá dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva.”

² Descontándose del plazo anterior los días treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil diecinueve, por corresponder a sábado y domingo, esto de conformidad con lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco vigente.



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 5 -

- Que la Sala viola en su perjuicio el principio de retroactividad de la ley, al fundamentar el acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, con base en el artículo 43, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa abrogada, la cual no se encuentra vigente, perjudicando así sus intereses.
- Así también, se duele el recurrente que la Sala omitió aplicar lo establecido por el artículo 139 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, toda vez que desde la fecha en que desahogó la última vista, ésta no ordenó el acuerdo de admisión de pruebas, ni las diligencias necesarias para su preparación y desahogo e incluso omitió acordar y notificar su escrito recepcionado en fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete; por lo que no existe fundamentación legal que haga soportar la carga de la inactividad provocada por la Sala.

Respecto a la autoridad demandada, fue omisa en desahogar la vista en torno al recurso de reclamación que se resuelve, por lo que mediante auto de cinco de marzo de dos mil veinte, se declaró precluido su derecho para tal efecto.

CUARTO.- ANÁLISIS DE LA LEGALIDAD DEL AUTO RECURRIDO.- De conformidad con lo antes relatado, este Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa determina que son, por una parte **infundados** y por otra **parcialmente fundados pero insuficientes**, los argumentos de reclamación antes sintetizados, por las consideraciones siguientes:

En principio, es de señalarse, tal como se precisó en apartados anteriores, que el auto recurrido lo constituye el de fecha **trece de noviembre de dos mil diecinueve**, dictado en el juicio contencioso administrativo **382/2016-S-3**, a través del cual, antes del cierre de instrucción, se sobreseyó dicho juicio.

Asimismo, también ha quedado precisado que la causa medular por la cual la **Tercera** Sala de este órgano jurisdiccional arribó a tal determinación fue, en esencia, al haberse constatado que las partes no impulsaron el procedimiento por un periodo mayor de ciento ochenta días naturales, a partir de la última actuación (seis de junio del dos mil diecisiete) por lo que se actualizaba la causal de

sobreseimiento prevista por el **artículo 43, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa abrogada**, ordenándose el archivo definitivo; lo que puede corroborarse de la siguiente transcripción (folios del 60 al 62 del duplicado del expediente de origen):

Página 1 de 5

382/2016-S-3

C Ó M P U T O .- El suscrito Secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala Unitaria Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, ~~hago constar~~ que el término de **ciento ochenta días** para que las partes impulsaran el procedimiento, para que no se considere la inactividad procesal empezó a contar a partir del día dieciocho de junio de dos mil diecisiete y concluyó el once de diciembre del mismo año.- **CONSTE** - -

R A Z Ó N .- En trece de noviembre de dos mil diecinueve, doy cuenta al C. Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con el estado procesal que guarda los presentes autos; a fin de determinar lo procedente. **CONSTE** - - - - -

Secretario de Estudio y Cuenta

TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO.- VILLAHERMOSA, TABASCO. A TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. - - -

Vistos el cómputo y la razón Secretarial, se acuerda: - - - - -

Primero.- Se hace del conocimiento de las partes, que mediante la I Sesión Ordinaria del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, celebrada el dos de enero de esta anualidad, ordenó la fijación y adscripción de Magistrados de las Salas Unitarias; quedando el Magistrado **Antonio Javier Augusto Nucamendi Otero** adscrito a la Tercera Sala. - - - - -

Segundo.- Advirtiéndose de autos, que el actor **Licenciado [REDACTED] Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas de la ciudadana [REDACTED]** no impulsó el procedimiento a través de promociones idóneas a efectos de agilizar el juicio que promovió en contra del **Receptor de Rentas de Centro, Tabasco** y el **Ejecutor ambos adscrito a la Secretaría de Planeación Finanzas Dirección de Recaudación Receptoría de Rentas de Centro, Tabasco**, pues si bien este presentó su demanda acordándosele la admisión oportunamente, proveyéndose respecto de la contestación el seis de junio de dos mil diecisiete, donde además se otorgó vista al actor



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco
Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 7 -

EXPEDIENTE NÚMERO 382/2016-S-3

para que manifestará lo que a su interés conviniera, misma que fue omisa en realizarlo, siendo esta la última actuación en el presente juicio, sin que a la presente fecha hubiere comparecido ante esta Sala para su culminación. -----

Tercero.- No obstante lo anterior, se debe considerar que la garantía de acceso a la justicia constituye un derecho del gobernado para que se le administre justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, con la obligación correlativa de que aquél cumpla con los requisitos exigidos por la ley, de manera que a pesar de que la voluntad de las partes es la que impera en los procedimientos contencioso administrativos, está siempre está supeditada a lo dispuesto por las leyes procesales. -----

Dicho de otra forma, la administración de justicia es un derecho del gobernado de que se le imparta ésta en los términos y plazos que fijan las leyes, sin embargo, ese derecho es correlativo de una obligación, consistente en sujetarse a los requisitos que exijan las leyes procesales, ya que la actividad jurisdiccional implica no sólo un quehacer del órgano judicial, sino también la obligación de los particulares de manifestar su voluntad de contribuir al procedimiento, por ende, su falta de interés generaría un problema para el mecanismo de la administración de justicia, además de que los juicios pendientes por tiempo indefinido producen una afectación del orden social. -----

Así, el artículo 43 fracción VI de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado abrogada¹, establece que la inactividad procesal opera de pleno derecho una vez que transcurran ciento ochenta días, desde el primer auto que se dicte en el juicio y hasta la citación para oír sentencia, lo que implica que la caducidad es una forma extraordinaria de terminación del proceso, debido a la inactividad procesal de una o ambas partes, que persigue cumplir con los principios de justicia pronta, expedita y de seguridad jurídica, consagrados en los artículos 16 y 17 constitucionales, ya que los actos que integran el procedimiento judicial, tanto a cargo de las partes como del órgano jurisdiccional, deben estar sujetos a plazos o términos y no pueden prolongarse indefinidamente. -----

¹ ARTÍCULO 43. Procede el sobreseimiento del juicio

VI. Por inactividad procesal de las partes, en un término de ciento ochenta días naturales.

Página 3 de 5

382/2016-S-3

Además, el ya referido artículo 43 fracción VI de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado abrogada, señala que la inactividad procesal opera de pleno derecho, lo que significa que se produce desde que transcurre el término relativo sin que existan actos de impulso procesal, y sin que la declaración judicial respectiva sea un elemento constitutivo de esa consecuencia procesal; no obstante ello, dicha institución jurídica no viola el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no impide el acceso a la impartición de justicia, pues no coarta el derecho de la parte actora de acudir a los tribunales para resolver un caso concreto. -----

Es decir, la referida figura jurídica permite al juzgador extinguir procesos ante la falta de interés de quien debe impulsarlos hasta su resolución, siendo congruente con el contexto de la legislación administrativa, en tanto que atribuir efectos jurídicos a la inactividad procesal implica poner fin a la indefinición de los derechos litigiosos y evita que las partes pudieran prolongar -a su voluntad o capricho- juicios que el legislador quiso tramitar con especial celeridad, así como la pendencia indefinida de los procesos, lo que entraña el acogimiento a los principios de seguridad jurídica y administración de justicia. -----

En este orden de ideas, se puede establecer que la inactividad procesal se encuentra regulada como una sanción a las partes por su inactividad, dentro del proceso contencioso administrativo, en el cual son respetadas las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que se permite a las partes iniciar un juicio, mediante la presentación de una demanda, ser emplazadas y tener la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes, presentar alegatos y obtener una resolución que resuelva de fondo el problema, con base en leyes emitidas con anterioridad al hecho y por tribunales imparciales y competentes. -----

Sin embargo, lo que ocasiona que el juicio culmine antes de que el juez emita una decisión de fondo cuando se decreta la inactividad procesal, es el incumplimiento de las partes a su carga procesal, esto es, el incumplimiento a su obligación correlativa de sujetarse a los plazos y términos fijados por la propia ley. -----

Asimismo, la caducidad es proporcional, siempre que se sujete a lo siguiente:

Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 8 -

EXPEDIENTE NÚMERO 382/2016-S-3

a) sólo puede tener lugar por la omisión de las partes de cumplir con sus cargas procesales, mas no puede imponerse por la sola inactividad del tribunal;

b) sólo extingue la instancia, lo que se traduce en que no se priva a las partes de su derecho a iniciar un nuevo juicio en el que hagan valer sus derechos;

c) sólo tiene lugar en juicios regidos por el principio dispositivo, en los que se ventilan intereses particulares y, por ende, derechos disponibles; y,

d) debe estar sujeta a plazos razonables, de forma que la caducidad sólo opere si es evidente que ha habido desinterés de las partes, o que han abandonado el juicio.

De todo lo anterior, se advierte que a la presente fecha han transcurrido más de **ciento ochenta días** de inactividad procesal, y para decretar la **inactividad procesal** se requiere de la actualización de lo previsto en el artículo 43 fracción VI, de la abrogada Ley de Justicia Administrativa, en consecuencia se decreta de plano la **Inactividad procesal en el presente juicio** y se declaran ineficaces las actuaciones del mismo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Al respecto, se cita la tesis del rubro y contenido siguiente:

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ESA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO SE ACTUALIZA ANTE LA INACTIVIDAD O FALTA DE PROMOCIÓN DEL DEMANDANTE DURANTE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, POR SER ÉSTE EN QUIEN RECAE LA OBLIGACIÓN DE IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADA). De la Interpretación literal del artículo 76, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos abrogada, se colige que, aun cuando la actividad procesal es una tarea cotidiana del órgano jurisdiccional, queda a cargo de las partes impulsar el procedimiento, por lo que la inactividad o falta de promoción durante ciento ochenta días naturales, ya sea por desinterés o negligencia del demandante, conduce a la declaración de caducidad de la instancia y, en consecuencia, al sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo, pues ésta obedece a que no promovió lo necesario para que el procedimiento continuara hasta su conclusión, de forma que dicha declaración no es consecuencia de la omisión del tribunal, sino de la apatía del actor, al no cumplir con la carga procesal para que el juicio no quede suspendido durante dicho intervalo. Lo anterior, porque el precepto referido no permite una interpretación en sentido contrario."²

² Registro: 2014300. XVIII.1o.P.A.2 A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Pág. 18/9.

Página 5 de 5

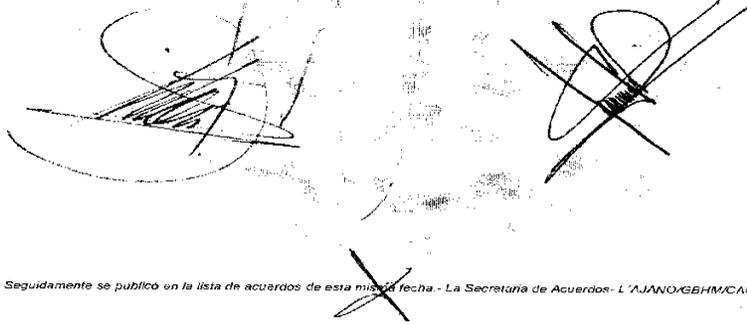
382/2016-S-3

En tal virtud, previa las anotaciones de rigor que se hagan en el libro de Gobierno respectivo, **archívese el presente expediente** como asunto concluido, haciendo devolución a la parte actora de los documentos originales que haya exhibido en la presente causa, debiendo dejar copia simple de los mismos, previa constancia y firma de recibido que otorguen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

De conformidad con los artículos 17,19,20, 21 y 179 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, y de no encontrarse al interesado en la primera búsqueda, **queda habilitado el actuario** para que practique la misma, en cualquier día y hora **inhábil**, conforme lo dispone el artículo 115, del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Tabasco aplicado supletoriamente a la ley mencionada en primer término, por disposición de su artículo primero, se le ordena que agote todos los medios de notificación que la ley le otorga para realizar la misma.

Así lo acordó, manda y firma el C. Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, por y ante el ciudadano Secretario de Estudio y Cuenta.- que autoriza y firma.- **DOY FE.**





Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 9 -

En este sentido, el **artículo 43, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa abrogada** -ordenamiento que contrario a lo aducido por el recurrente sí resulta aplicable al juicio de origen, por virtud de lo dispuesto en el diverso numeral Segundo Transitorio, segundo párrafo, de la Ley Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, publicada el quince de julio de dos mil diecisiete, en el Suplemento B al Periódico Oficial del Estado, número 7811, y que entró en vigor al día siguiente³-, al respecto dispone:

“Artículo 43.- Procede el sobreseimiento del juicio:

(...)

VI.- Por inactividad procesal de las partes, en un término de ciento ochenta días naturales.

(...)”

(El subrayado es nuestro)

Conforme a tal dispositivo, procede el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo, por *inactividad procesal de las partes*, en un término *de ciento ochenta días naturales (180)*.

Ahora bien, para entender los alcances de dicha causal de sobreseimiento, es necesario remontarnos a lo que la doctrina ha entendido por *inactividad procesal de las partes*.

En este aspecto, en seguidas ocasiones se ha identificado a la inactividad procesal de las partes como *“caducidad de la instancia”*, esto como una especie extintiva de las obligaciones en materia procesal, que implica que ante la falta de actividad de las partes en el proceso durante cierto tiempo, se extingue dicho procedimiento y, por ende, la instancia *caduca*, es decir, pierde su fuerza legal y/o vinculatoria⁴. Lo anterior sin llegar al dictado de la sentencia definitiva,

³ “SEGUNDO. (...)”

Los Juicios Contencioso Administrativos y medios de impugnación iniciados ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.”

⁴ Guerrero Linares, Ángel. “La caducidad como medio de extinción de las obligaciones”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultado a través de la página en internet <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3968/11.pdf>

precisamente por causa de inactividad de quien ha de preocuparse de incrementar la dinámica de ese proceso.

En el mismo sentido, Eduardo Pallares sostiene que la *perención* -también llamada *caducidad*-, es la nulificación de la instancia y se produce por la inactividad procesal de las partes durante el tiempo que fija la ley, es decir, como consecuencia de un *no hacer*. Dicha institución es de orden público y se ha establecido en beneficio de la sociedad y el Estado, y no tan sólo para proteger un interés jurídico de los particulares, por lo que no existe un derecho renunciable, ya que si las partes pudieran hacerlo, la facultad de los tribunales de declararla de oficio quedaría nulificada. Describe también que dicha caducidad se refiere a la instancia y no a la acción, y, opera de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. Esto quiere decir que la caducidad se produce y se debe considerar existente, aunque no haya sido solicitada su declaración. Además, la caducidad, por regla general, no se suspende sino sólo en los casos en que por razones diversas a la misma caducidad, la suspensión deba ser forzosa y tenga lugar, como en los casos de muerte o en los de fuerza mayor, entre otros.⁵

De igual forma, el citado jurista refiere que la suspensión se distingue claramente de la interrupción, porque el único efecto de esta última es tener por no transcurrido el tiempo corrido con anterioridad al acto que interrumpe, sin que por ello deje de correr de nuevo al día siguiente de aquél en que tuvo lugar dicho acto.

En ese contexto, podemos decir que la caducidad no es el acto o conducta de las partes, sino la consecuencia a la conducta (omisiva) de ellas, lo que constituye una sanción a su inactividad procesal, debido a que se presume que las partes han perdido interés en la contienda, por lo que si ellos no manifiestan su voluntad de terminar el proceso, la ley se sustituye a esa omisión de voluntad y da por terminada la instancia con la caducidad, pues sería irracional

⁵ Pallares, Eduardo. "[La caducidad y el sobreseimiento en el amparo](http://biblio.upmx.mx/textos/86985.pdf)". Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultado a través de la página en internet <http://biblio.upmx.mx/textos/86985.pdf>



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 11 -

mantener vigente una contienda en la que durante años no se ha promovido nada, sin que tal circunstancia produzca la pérdida de los derechos de fondo, pues la cuestión planteada puede replantearse en un proceso ulterior y distinto sin perjuicio del transcurso de los plazos de prescripción.

No obstante lo anterior, para el caso que en el asunto ya se hubiese dictado sentencia, en tales condiciones, ya no puede operar la caducidad, precisamente porque en esa hipótesis, la instancia ya se considera terminada y lo único que podría operar en aras de la seguridad jurídica, sería la prescripción del derecho a obtener la ejecución de la sentencia, lo cual es otro tema.

Bajo esas premisas, para la *interrupción* de la *caducidad* de la instancia en el juicio contencioso administrativo, es necesaria la actuación de la parte interesada (en el caso que nos ocupa, la parte actora), con la que se dé impulso procesal al juicio de origen, pues sin duda alguna, a la demandada ningún perjuicio le acarrea el sobreseimiento del juicio por haber operado la caducidad con el transcurso del tiempo.

Sin embargo, no debe interpretarse que la actuación de la parte interesada corresponda a una de cualquier tipo –tal como la solicitud de copias o un cambio de domicilio y autorizados–, sino que dependerá de la etapa procesal en la que se encuentre el juicio y la promoción que se requiera para seguirlo impulsando, no así la de la última fecha en que se haya promovido, pues el hecho que se presenten promociones por las partes, no significa que constituya un impulso al procedimiento (carga que recae en el caso del juicio contencioso administrativo sobre la parte actora), es decir, de una etapa a otra; pensar lo contrario, significaría que siempre se estaría impulsando el procedimiento, sin salir de un estado procesal.

Sobre este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que las promociones que pueden impulsar el procedimiento son aquéllas que revelan o expresan el

deseo o voluntad de las partes de mantener viva la instancia, esto es, aquellas que tengan como consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar hasta el dictado de la sentencia, además que la promoción sea coherente con la correspondiente secuela procesal, y si en ellas se solicita que se inicie una etapa procesal o se realice un acto procesal, cuando aquélla ya concluyó o éste ya se realizó, no son oportunas ni coherentes con la secuela procesal, de tal manera que no podrían obtener lo que buscan.

El criterio al que nos hemos referido se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia **1a./J. 1/96**, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, con número de registro 200432, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, página 9, cuyo rubro y contenido son del tenor literal siguiente:

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SOLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCION A TRAVES DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO. (LEGISLACION PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).

Para que se interrumpa la caducidad será necesario un acto procesal de las partes que manifieste su deseo o su voluntad de continuar el procedimiento, acto que, cabe subrayar, deberá ser de aquellos que la doctrina califica de impulso procesal, esto es, que tienen el efecto de hacer progresar el juicio. Lo dicho se explica no sólo en función de lo que sanciona la ley, o sea, la inactividad procesal de las partes, que de suyo revela el desinterés en que se continúe con el asunto y que se llegue a dictar sentencia, a modo tal que si las partes o alguna de ellas tiene interés en que no opere la caducidad, necesariamente habrá de asumir la conducta procesal correspondiente, a saber: impulsar el juicio mediante la promoción respectiva. También se advierte que la naturaleza de esta última, como puede verse de la exposición de motivos del legislador deberá ser tal que tenga el efecto de conducir o encauzar el juicio hasta llegar a su fin natural. En efecto, la modalidad de la reforma entonces planteada fue también en el sentido de impedir la interrupción del término de la caducidad con promociones frívolas o improcedentes, sino sólo con aquellas que revelaran o expresaran el deseo o voluntad de las partes de mantener viva la instancia, esto es, que tuvieran como consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia. Además, debe tenerse en cuenta que el impulso



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 13 -

del proceso por los litigantes no es un deber; es sencillamente una carga en el sentido técnico procesal del vocablo, carga que pesa sobre los contendientes. Sobre el particular, los procesalistas distinguen poder, deber y carga. Por el primero se crean situaciones jurídicas; por el deber se establece la necesidad insoslayable de seguir determinada conducta para satisfacer un interés ajeno a un con sacrificio del propio. Se tiene una carga cuando la ley fija el acto o actos que hay que efectuar como condición para que se desencadenen los efectos favorables al propio interesado quien, para que el proceso no se extinga y se mantenga vivo, es condición que promueva. Así las cosas, no obsta para lo hasta aquí sostenido que el artículo 137 bis no determine la naturaleza de las promociones que puedan interrumpir la caducidad de la instancia, toda vez que dicho carácter deriva de los derechos de acción y contradicción que competen a las partes, esto es, de las facultades que como cargas procesales tienen de activar el procedimiento para poder llevarlo hasta su terminación si quieren conseguir un resultado favorable, de tal manera que si no la realizan no podrán obtener lo que buscan. De entre dichas cargas es la del impulso procesal a la que se refiere la norma en comento al aludir a las promociones de las partes, que consiste en la actividad necesaria para que el proceso siga adelante a través de los distintos estadios que lo componen y que es consecuencia del principio dispositivo que domina el procedimiento civil ordinario, el cual se enuncia diciendo que el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, los límites mismos de la acción y la propia actividad del Juez, se regulan por la voluntad de las partes contendientes. Por tanto, no es cierto que baste la promoción de cualquier escrito para interrumpir la caducidad de la instancia y que no importe su contenido siendo más que suficiente que se dirija al expediente por cualquiera de las partes.

Contradicción de tesis 12/95. Entre las sustentadas por el Séptimo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 29 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Iram García García.

Tesis de Jurisprudencia 1/96. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.”

(El subrayado es nuestro)

De tal suerte podemos colegir que la caducidad (inactividad procesal) en el juicio contencioso administrativo es la sanción impuesta por la ley al promovente del juicio por el abandono del

proceso durante determinado tiempo, es decir, se impone dicha figura ante la falta de interés en hacer uso de ese derecho.

También podemos colegir que dicha figura procesal es una institución jurídica de *orden público*, acogida por nuestro derecho en beneficio del principio de seguridad jurídica, con el propósito de dar estabilidad y firmeza al juicio, y no así hacer interminable su tramitación; de esa forma, la figura de la caducidad está estrechamente vinculada con el derecho fundamental al acceso efectivo a la justicia en su vertiente de principio de defensa, pues en observancia a ésta, se concede a los gobernados la posibilidad de controvertir actos de autoridad que afecten su esfera jurídica, sin embargo, tal potestad se encuentra limitada a que se realice en los términos que la ley establece y, **en cuanto a su ejercicio, se obliga al gobernado a seguirlo hasta sus últimas instancias**, so pena de que pueda actualizarse la extinción de la instancia en virtud de su inactividad procesal.

Partiendo de las premisas anteriores, como se adelantó al inicio del presente considerando, los argumentos vertidos a manera de agravios por la parte actora en el juicio de origen, hoy recurrente, son, por una parte **infundados** y por otra **parcialmente fundados pero insuficientes**, en atención a lo siguiente:

Con relación a los argumentos en los que el recurrente aduce una violación en su perjuicio al principio de retroactividad de la ley, ya que la Sala fundamentó el acuerdo recurrido con base en la Ley de Justicia Administrativa del Estado abrogada, cuando ésta ya no se encuentra vigente; así también que se vulnera lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado vigente, debido a que la Sala Unitaria no ordenó el acuerdo de admisión de pruebas, ni las diligencias y desahogo de las mismas; dichos argumentos devienen infundados por insuficientes.

Lo anterior es así, en virtud de que en fecha quince de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el periódico oficial del Estado de Tabasco, la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco,



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 15 -

y de conformidad con el párrafo segundo del artículo Segundo Transitorio de esa ley, los juicios contenciosos administrativos y medios de impugnación iniciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, deberían concluirse conforme a ese mismo ordenamiento, por lo que se infiere que la aplicación de la ley abrogada corresponderá únicamente a aquellos juicios previamente iniciados a la entrada en vigor, circunstancia que acontece en el juicio de origen, pues la demanda fue presentada con **anterioridad** a la entrada en vigor del ordenamiento señalado (**once de mayo de dos mil dieciséis**), resultando correcto la fundamentación aplicada por la Sala en el acuerdo recurrido.

Así también, se tiene que mediante el escrito recepcionado ante la Sala el dieciséis de junio del dos mil diecisiete, la parte actora, por conducto de su apoderado legal, presentó el desahogo de vista respecto a la contestación de la autoridad demandada; sin embargo, con independencia que después de la presentación de dicho escrito, la Sala Unitaria de origen no emitió actuación procesal inmediata, sino que esto lo hizo hasta el día **trece de noviembre de dos mil diecinueve**, en el que, antes del cierre de instrucción, *sobreseyó* dicho juicio; ello no era obstáculo para que pudiera proceder legalmente de esa forma (sobreseimiento por *inactividad procesal*), habida cuenta que la parte actora seguía teniendo la obligación de impulsar el procedimiento, al ser, se insiste, la parte sobre quien recae principalmente la obligación de dar el impulso procesal al juicio contencioso administrativo.

Sin embargo, aun considerando lo dispuesto por los artículos 62 y 63 de la Ley de Justicia Administrativa abrogada⁶, y aun cuando dichos numerales disponen que una vez contestada la demanda, su ampliación, en su caso, o transcurrido el plazo para contestarla, el

⁶ “**Artículo 62.-** Contestada la demanda, su ampliación, en su caso, o transcurrido el plazo para contestarla, el Tribunal señalará día y hora para la celebración de la audiencia final dentro de los treinta días siguientes, en la que se desahogarán las pruebas, salvo las señaladas en el artículo siguiente y la documental que podrá presentarse antes.”

“**ARTICULO 63.-** Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los diez días anteriores a la audiencia final, salvo la inspeccional y la pericial que deberán ofrecerse antes de quince días. El Tribunal procederá a ordenar el desahogo de las pruebas inspeccional y pericial, ofrecidas en tiempo, a la brevedad necesaria, para que antes de la audiencia queden desahogadas.”

tribunal señalará día y hora para la celebración de la audiencia final dentro de los treinta días siguientes; lo cierto es que, ante la falta de pronunciamiento en ese sentido por parte de la Sala instructora, era la parte actora quien, *en el caso en particular*, se encontraba obligada a seguir dando el impulso procesal en el juicio contencioso administrativo para, de esa forma, a su vez, obligar a la Sala de origen a dictar la siguiente actuación e interrumpir el plazo para que operara la caducidad, o bien, promover los medios legales conducentes para evitar esa inactividad.

A mayor abundamiento, para verificar que efectivamente, antes del dictado del auto recurrido, hubiere transcurrido el término de **ciento ochenta días naturales** previstos en la fracción VI del numeral 43 anteriormente invocado, **se tiene que el cómputo debe realizarse a partir de la fecha de presentación de la promoción suscrita por la parte actora**, la cual fue recibida por la Sala Unitaria el dieciséis de junio de dos mil diecisiete y que interrumpió el plazo de caducidad; en este tenor, el plazo de caducidad antes señalado, comenzó a correr a partir del día **natural** siguiente, esto es, del diecisiete de junio de dos mil diecisiete, mismo que concluyó el **trece de diciembre de dos mil diecisiete**, lo que se puede ver representado a través de los siguientes cuadros:

JUNIO 2017						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
					<u>Presentación del escrito</u>	Día 1 <u>Inicia el plazo</u>
18	19	20	21	22	23	24
<u>Día 2</u>	<u>Día 3</u>	<u>Día 4</u>	<u>Día 5</u>	<u>Día 6</u>	<u>Día 7</u>	<u>Día 8</u>
25	26	27	28	29	30	
<u>Día 9</u>	<u>Día 10</u>	<u>Día 11</u>	<u>Día 12</u>	<u>Día 13</u>	<u>Día 14</u>	
Días naturales= 14						



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 17 -

JULIO 2017						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
						1 <u>Día 15</u>
2 <u>Día 16</u>	3 <u>Día 17</u>	5 <u>Día 18</u>	5 <u>Día 19</u>	6 <u>Día 20</u>	7 <u>Día 21</u>	8 <u>Día 22</u>
9 <u>Día 23</u>	10 <u>Día 24</u>	11 <u>Día 25</u>	12 <u>Día 26</u>	13 <u>Día 27</u>	14 <u>Día 28</u>	15 <u>Día 29</u>
16 <u>Día 30</u>	17 <u>Día 31</u>	18 <u>Día 32</u>	19 <u>Día 33</u>	20 <u>Día 34</u>	21 <u>Día 35</u>	22 <u>Día 36</u>
23 <u>Día 37</u>	24 <u>Día 38</u>	25 <u>Día 39</u>	26 <u>Día 40</u>	27 <u>Día 41</u>	28 <u>Día 42</u>	29 <u>Día 43</u>
30 <u>Día 44</u>	31 <u>Día 45</u>					
Días naturales= 31						

AGOSTO 2017						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		1 <u>Día 46</u>	2 <u>Día 47</u>	3 <u>Día 48</u>	4 <u>Día 49</u>	5 <u>Día 50</u>
6 <u>Día 51</u>	7 <u>Día 52</u>	8 <u>Día 53</u>	9 <u>Día 54</u>	10 <u>Día 55</u>	11 <u>Día 56</u>	12 <u>Día 57</u>
13 <u>Día 58</u>	14 <u>Día 59</u>	15 <u>Día 60</u>	16 <u>Día 61</u>	17 <u>Día 62</u>	18 <u>Día 63</u>	19 <u>Día 64</u>
20 <u>Día 65</u>	21 <u>Día 66</u>	22 <u>Día 67</u>	23 <u>Día 68</u>	24 <u>Día 69</u>	25 <u>Día 70</u>	26 <u>Día 71</u>
27 <u>Día 72</u>	28 <u>Día 73</u>	29 <u>Día 74</u>	30 <u>Día 75</u>	31 <u>Día 76</u>		
Días naturales= 31						

SEPTIEMBRE 2017						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
					1 <u>Día 77</u>	2 <u>Día 78</u>
3 <u>Día 79</u>	4 <u>Día 80</u>	5 <u>Día 81</u>	6 <u>Día 82</u>	7 <u>Día 83</u>	8 <u>Día 84</u>	9 <u>Día 85</u>
10 <u>Día 86</u>	11 <u>Día 87</u>	12 <u>Día 88</u>	13 <u>Día 89</u>	14 <u>Día 90</u>	15 <u>Día 91</u>	16 <u>Día 92</u>
17 <u>Día 93</u>	18 <u>Día 94</u>	19 <u>Día 95</u>	20 <u>Día 96</u>	21 <u>Día 97</u>	22 <u>Día 98</u>	23 <u>Día 99</u>

24 <u>Día 100</u>	25 <u>Día 101</u>	26 <u>Día 102</u>	27 <u>Día 103</u>	28 <u>Día 104</u>	29 <u>Día 105</u>	30 <u>Día 106</u>
Días naturales= 30						

OCTUBRE 2017						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
1 <u>Día 107</u>	2 <u>Día 108</u>	3 <u>Día 109</u>	4 <u>Día 110</u>	5 <u>Día 111</u>	6 <u>Día 112</u>	7 <u>Día 113</u>
8 <u>Día 114</u>	9 <u>Día 115</u>	10 <u>Día 116</u>	11 <u>Día 117</u>	12 <u>Día 118</u>	13 <u>Día 119</u>	14 <u>Día 120</u>
15 <u>Día 121</u>	16 <u>Día 122</u>	17 <u>Día 123</u>	18 <u>Día 124</u>	19 <u>Día 125</u>	20 <u>Día 126</u>	21 <u>Día 127</u>
22 <u>Día 128</u>	23 <u>Día 129</u>	24 <u>Día 130</u>	25 <u>Día 131</u>	26 <u>Día 132</u>	27 <u>Día 133</u>	28 <u>Día 134</u>
29 <u>Día 135</u>	30 <u>Día 136</u>	31 <u>Día 137</u>				
Días naturales= 31						

NOVIEMBRE 2017						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
			1 <u>Día 138</u>	2 <u>Día 139</u>	3 <u>Día 140</u>	4 <u>Día 141</u>
5 <u>Día 142</u>	6 <u>Día 143</u>	7 <u>Día 144</u>	8 <u>Día 145</u>	9 <u>Día 146</u>	10 <u>Día 147</u>	11 <u>Día 148</u>
12 <u>Día 149</u>	13 <u>Día 150</u>	14 <u>Día 151</u>	15 <u>Día 152</u>	16 <u>Día 153</u>	17 <u>Día 154</u>	18 <u>Día 155</u>
19 <u>Día 156</u>	20 <u>Día 157</u>	21 <u>Día 158</u>	22 <u>Día 159</u>	23 <u>Día 160</u>	24 <u>Día 161</u>	25 <u>Día 162</u>
26 <u>Día 163</u>	27 <u>Día 164</u>	28 <u>Día 165</u>	29 <u>Día 166</u>	30 <u>Día 167</u>		
Días naturales= 30						

DICIEMBRE 2017						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
					1 <u>Día 168</u>	2 <u>Día 169</u>
3 <u>Día 170</u>	4 <u>Día 171</u>	5 <u>Día 172</u>	6 <u>Día 173</u>	7 <u>Día 174</u>	8 <u>Día 175</u>	9 <u>Día 176</u>



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 19 -

10 <u>Día 177</u>	11 <u>Día 178</u>	12 <u>Día 179</u>	13 <u>Día 180</u>	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
Días naturales= 13						

Con lo anterior se constata que, a la fecha en que se emitió el auto recurrido de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, ya había transcurrido en exceso el plazo de los **ciento ochenta días naturales** que disponía el citado numeral 43, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa entonces vigente, pues dicho plazo feneció, según se observa del cómputo antes realizado, el trece de diciembre de dos mil diecisiete, sin que se acredite en autos que durante dicho plazo, la parte actora haya realizado actuación alguna tendiente a dar impulso al procedimiento, o bien, promover los medios legales conducentes para evitar dicha inactividad.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que la carga de dar el impulso procesal, como se ha podido analizar, se encuentra prevista en el propio artículo 43, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa abrogada, que resulta aplicable al juicio contencioso administrativo de origen –conforme a lo que previamente se ha analizado-, pues es el que establece una carga procesal a las partes para impulsar el juicio contencioso administrativo, tan es así que señala que procede el sobreseimiento del juicio por *“inactividad procesal de las partes, en un término de ciento ochenta días naturales”*; con lo anterior, es claro que tal dispositivo establece la figura de la *caducidad procesal*, figura que opera, conforme a lo previamente analizado, en contra de quien haya iniciado el procedimiento, en este caso, la parte actora, por lo que es lógico jurídicamente que sea ésta quien tenga la carga procesal de impulsarlo, cuando así le corresponda, como en el caso sucedió.

Así también, resulta parcialmente fundado pero insuficiente el argumento esgrimido por la actora, en el sentido de que, *el a quo*, no se pronunció respecto al escrito presentado en fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, a través del cual, en esencia, desahogó la vista ordenada en el auto de seis de junio de dos mil diecisiete, mismo que adjunta a su escrito de recurso para mayor constancia.

Ello es así, pues con independencia que de autos del toca se advierta que obra agregada la promoción de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete (visible a folios del 6 al 8 del toca de reclamación), misma que fue ofrecida como prueba en el presente medio de impugnación por no haber sido relacionada por la Sala en el acuerdo recurrido, de la cual se advierte que la parte actora, realizó una serie de manifestaciones en relación al oficio de contestación presentado por las autoridades demandadas, sin que dicha promoción haya sido mencionada o valorada por la Sala, (sino que su contenido se advierte del acuse exhibido como prueba en el recurso de reclamación que se resuelve) o se hubiere realizado pronunciamiento alguno por dicha Sala (esto antes de dictar el sobreseimiento); lo cierto es que tales circunstancias tampoco soslayan la carga procesal que correspondía a la parte actora de seguir impulsando **oportunamente** el procedimiento mediante las promociones idóneas para tales efectos, o bien, promoviendo los medios de defensa conducentes para que se siguiera impulsando el procedimiento, esto de conformidad con los argumentos antes expuestos.

En mérito de lo expuesto y una vez agotado el estudio de los argumentos de agravio expuestos por el recurrente, sin que ninguno resultara fundado y suficiente para acreditar su pretensión, procede **confirmar** el acuerdo de fecha **trece de noviembre de dos mil diecinueve**, dictado en el juicio contencioso administrativo **382/2016-S-3**, a través del cual, antes del cierre de instrucción, se sobreseyó dicho juicio.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, 109, 110 y 171, fracción XXII, de la Ley



Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, publicada el quince de julio de dos mil diecisiete, en el Suplemento B al Periódico Oficial del Estado, número 7811, es de resolverse y se:

R E S U E L V E

I.- Este Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco es **competente** para resolver el presente recurso de reclamación.

II.- Resultó **procedente** el recurso de reclamación propuesto.

III.- Resultaron, por un parte **infundado** y por otra parte **parcialmente fundado pero insuficiente**, los agravios planteados por la parte recurrente; en consecuencia,

IV.- Se **confirma** el **auto de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve**, dictado en el juicio contencioso administrativo **382/2016-S-3**, a través del cual, antes del cierre de instrucción, se sobreseyó dicho juicio, ello conforme a lo expuesto en el último considerando de la presente sentencia.

V.- Una vez firme el presente fallo, con **copia certificada** del mismo, notifíquese a la **Tercera Sala Unitaria** de este tribunal y remítanse los autos del toca **REC-033/2020-P-3** (Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior) y el duplicado del juicio **382/2016-S-3**, para su conocimiento y, en su caso, ejecución.

Notifíquese a las partes la presente sentencia de conformidad con los artículos 17 y 18, fracción XIII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado vigente.- **Cúmplase.**

ASÍ LO RESOLVIÓ EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS **JORGE ABDO FRANCIS** COMO PRESIDENTE Y PONENTE, **RURICO DOMÍNGUEZ MAYO**, y **DENISSE JUÁREZ HERRERA**, QUIENES FIRMAN ANTE LA SECRETARIA

GENERAL DE ACUERDOS **HELEN VIRIDIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 171, FRACCIÓN VIII, Y 177 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 12, FRACCIÓN XIV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, **QUIEN CERTIFICA Y DA FE.**

DR. JORGE ABDO FRANCIS

Magistrado Presidente, Ponente y titular de la Primera Ponencia.

MTRO. RURICO DOMÍNGUEZ MAYO

Magistrado titular de la Segunda Ponencia

M. EN D. DENISSE JUÁREZ HERRERA

Magistrada titular de la Tercera Ponencia

LIC. HELEN VIRIDIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Secretaria General de Acuerdos

Que las presentes firmas corresponden a la resolución del Toca del Recurso de Reclamación **REC-033/2020-P-3** (Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior), misma que fue aprobada en la sesión de Pleno celebrada el cuatro de septiembre de dos mil veinte.

“...De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 3 fracción VIII y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas; 3 y 8 de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, del Estado de Tabasco y el acuerdo TJA-CT-001/2021 del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa, se indica



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Toca de Reclamación núm. REC-033/2020-P-3
(Reasignado al Titular de la Primera Ponencia de la Sala Superior)

- 23 -

que fueron suprimidos del documento, datos personales de personas físicas, y personas Jurídico Colectivas, como: nombre, teléfono particular, historial médico, estado civil, deducciones salariales y deudas, correo electrónico personal; por actualizarse lo señalado en dichos supuestos normativos...”-----